

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**



**SALA LABORAL**

Medellín, dos (02) de marzo de 2023

**SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001310501320150062101, promovido por el señor **DAVID RAMÓN SUAREZ ARGUMEDO** en contra de **PORVENIR S.A.**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el dieciséis (16) de enero del año dos mil diecisiete (2017).

De conformidad con el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y

se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **051**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

### **ANTECEDENTES**

El señor David Ramón Suárez Argumedo, solicitó mediante el presente proceso, se declarara que se encuentra válidamente afiliado al fondo Horizontes Pensiones y Cesantías, quien es el responsable del pago de los aportes en pensión por los periodos comprendidos entre el 26 de agosto del año 2003 y el 8 de marzo del año 2008, por tanto se ordene a la pasiva al reconocimiento, pago y acreditación de los aportes en la cuenta de ahorro individual, en atención al artículo 58 de la ley 1116 de 2006, validando así los aportes en pensión pagados con la adjudicación en el trámite de liquidación judicial de la sociedad Comercializadora Internacional Sociedades Unidas S.A. (C.I. SUNISA S.A.).

Como fundamento de sus pretensiones expuso, que se encuentra afiliado a Horizontes Pensiones y Cesantías desde el 26 de agosto de 2003, fecha desde la cual ingresó a trabajar en la empresa C.I. SUNISA S.A. ya inactiva por terminación del trámite de liquidación judicial adelantado por la Superintendencia de Sociedades. Argumentó que mediante providencia 156-02864 del 10 de marzo de 2008, la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite de la liquidación judicial de los bienes que conformaban el patrimonio de la sociedad C.I. SUNISA S.A. en los términos del artículo 1, 47 y siguientes de la ley 1116 de 2006. Horizontes Pensiones y Cesantías, solicitó presentación de crédito dentro del proceso de liquidación judicial de C.I. SUNISA S.A., indicando que el valor ascendía a la suma de \$46.507.510, pero no se presentó en la liquidación judicial

por los aportes de pensión dejados de cancelar respecto al aquí demandante, omisión que se resalta en radicado 2008-02-015764.

Explicó, que el liquidador presentó el proyecto de adjudicación de bienes, donde registra Horizontes Pensiones y Cesantías por valor de \$29.419.542, y mediante auto 405-007955 de 20 de mayo de 2011, la Superintendencia de Sociedades aprobó el proyecto de la adjudicación de bienes siendo cancelado al fondo el valor total con la adjudicación de bienes de la sociedad, sin que en el estado de cuenta del actor se encuentren acreditados los aportes reconocidos y pagados dentro del trámite de liquidación judicial.

Admitida la demanda mediante auto del siete (7) de mayo del año dos mil quince (2015), bajo la claridad que la pasiva se fusionó con Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., quien deberá fungir como extremo pasivo, una vez notificado, dio respuesta al libelo gestor indicando sobre los hechos narrados:

Aceptó que el demandante se encuentra debidamente afiliado a Porvenir S.A., desde el 26 de julio del año 1994, y no le consta la fecha de terminación de la relación laboral que se esgrime en la demanda. Argumentó que la empleadora SUNISA S.A. a favor de Porvenir y respecto a los aportes del aquí demandante adeuda un total de \$6.361.969 correspondiente a 34 ciclos de aportes, expresó que el fondo si se hizo parte del proceso liquidatorio, y le fue adjudicado una alícuota del 0.70% de cada uno de los inmuebles relacionados con las matrículas 001-29177; 340-55613; 340-60216; 340-83986; 34080527; 340-40920; 34040923 y 034-7925, bienes que no han sido enajenados, por lo cual, el dinero aún no ha sido recaudado, siendo una petición antes de tiempo la elaborada por la parte actora. Finalmente

se opuso a la prosperidad de las pretensiones e interpuso las excepciones que denominó: *“Petición antes de tiempo”, “Falta de causa para pedir” “Buena fe”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Prescripción”, “Ausencia de responsabilidad atribuible a la demandada.”*

En sentencia proferida el dieciséis (16) de enero del año dos mil diecisiete (2017) el Juzgado Trece Laboral Del Circuito de Medellín, declaró que Porvenir S.A. es la responsable del pago de los aportes al señor David Ramón Suarez Argumedo, y por tanto debe imputar como pagados los periodos de julio de 2004 y julio de 2005 a 8 de marzo de 2008 en virtud de la adjudicación de los bienes inmuebles en el proceso de liquidación judicial de la sociedad Comercializadora Internacional Sociedades Unidas SA – CI SUNISA S.A., y declaró improbadas las excepciones propuestas, condenó en costas a la parte demandada.

### **RECURSO DE APELACIÓN**

La pasiva interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia emitida, argumentando que, si bien se le adjudicaron unos bienes para el pago de aportes no cancelados por la entidad en liquidación, dichos bienes no pueden ser tomados como cifra líquida para ingresarlos a la cuenta de ahorro individual por no haber sido enajenados, pues la falta de ingreso de los valores como una suma líquida imposibilita ello. Expone que el fondo actuó bajo los criterios de la ley y los parámetros auxiliares de la superintendencia financiera frente a este tipo de actuaciones, por lo cual, solicita se revoque la sentencia proferida.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Corrido el traslado para alegar, el apelante solicitó la revocatoria de la providencia, exponiendo que no se tiene certeza sobre los periodos laborados por la parte actora frente al empleador liquidado respecto al que no se depuró deuda, y que, si bien se adjudicaron unos bienes a favor del fondo pensional, no pueden ser abonados como forma de pago de acreencias de la seguridad social, ni aportes pensionales ya que no pueden reflejarse en la cuenta de ahorro individual del demandante. Explica que existe una imposibilidad legal de redimir los bienes en semanas y que, PORVENIR S.A. realizó en forma diligente las gestiones de cobro respectivas, por lo cual, solicita se revoque la sentencia de primera instancia.

La parte demandante reiteró los hechos del libelo gestor, respecto a la afiliación, relación laboral con la empresa deudora, inicio del proceso de liquidación y presentación de la AFP en el proceso de liquidación judicial en la cual, la AFP solicitaba el cobro de \$46.507.510, pero obteniendo mediante radicado 201-01-077477 del 9 de marzo de 2011 la adjudicación de bienes por valor de \$29.419.542, equivalente al 100% del capital adeudado, por lo cual, la deuda quedaba totalmente saldada. Explica que la demandada si tenía los medios para conocer el vínculo laboral existente entre el actor y la empresa C.I. SUNINSA SA, pues en virtud de sus obligaciones legales, tienen la posibilidad de determinar las deudas reales y las deudas presuntas de los empleadores, por lo cual, solicita se confirme la decisión tomada en Primera Instancia.

## **PROBLEMA JURÍDICO**

El problema jurídico de esta instancia, consiste en determinar, si es obligación de la demandada, Porvenir S.A., imputar como pagados los aportes a favor del demandante, entre el 26 de agosto de 2003 y el 8 de marzo del año 2008, en atención a la adjudicación de los bienes realizado dentro del proceso liquidatorio de la empresa Comercializadora Internacional Sociedades Unidas S.A.

## **CONSIDERACIONES**

Preliminarmente ha de indicarse, que el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la ley 712 de 2001, restringe la competencia del superior en el recurso de alzada, a las materias objeto del recurso de alzada.

Consonante con lo expuesto, en el presente caso, el análisis respectivo se limita al ataque de la sentencia que se revisa en apelación, con respecto a la manifestación de la accionada de la imposibilidad de acreditar en la cuenta de ahorro pensional del actor, de los dineros dispuestos por la *a quo*, en razón a que los bienes adjudicados a la accionada en la liquidación de la compañía C.I. SUNISA SA., derivada de acreencias de aportes pensionales, no han sido enajenados, y ello solo es posible con cantidades liquidas de dinero.

Ahora, el artículo 164 del Código General del Proceso establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, y el artículo 167 ibídem consagra el principio de la carga de la prueba que se explica

afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción.

Aportado por la parte actora, reposa en el expediente certificado emitido por el doctor Felipe Negret Mosquera, en calidad de ex Liquidador de C.I. SUNISA S.A., documento que no fue controvertido ni tachado por la contra parte, en donde se expone que el señor David Ramón Suarez Argumedo laboró para dicha empresa desde el 26 de agosto del año 2003 y hasta el 8 de mayo del año 2008, contando con una asignación salarial final en la suma de \$1.300.000.

De la prueba documental aportada al proceso se constata, la ausencia de novedades de retiro por parte del empleador que se predica moroso, por lo cual, no es comprensible la duda de Porvenir S.A. de la existencia de la relación laboral en los extremos indicados en la certificación que fue aportada con la demanda, pues en efecto, como se acepta por la pasiva, mediante providencia 405-021088 del 12 de noviembre de 2010 se aprobó la diligencia de reconocimiento de créditos, entre los que se encontraba a favor de Porvenir SA, la suma de \$29.419.542, que posteriormente en auto número 405-007955 de 20 de mayo del año 2011 fue cubierta por la adjudicación de algunos porcentajes de bienes inmuebles con matrículas:

001-29197: 0.77%

008-32636: 2.30%

340-40920: 0.70%

340-40923: 0.70%

340-55613: 0.70%

340-80527: 0.70%

05001310501320150062101

340-83986: 0.70%

340-60216: 0.70%

Esta obligación de cobro, se encuentra reglada en el artículo 24 de la ley 100 de 1993 así:

*«Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.»*

Por su parte el decreto 2633 de 1994 en su artículo primero contempla:

*«El cobro de los créditos por jurisdicción coactiva se sujetará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, en especial los artículos 561 a 568, las normas que lo modifiquen o adicionen y las disposiciones del presente Decreto.*

*«Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá, si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual presentará mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.»*

En efecto, tal y como lo explicó en extremo detalle la juez de instancia, recae por mandato legal la obligación sobre las AFP, el cobro de los aportes respecto a los empleadores morosos, línea jurisprudencial que continuó en evolución sin cambio alguno y que en sentencia SL 1363 de 2018 recordó:

*“...Para responder al requerimiento de la censura, ésta Sala de Casación ratifica,*



*que desde la sentencia CSJ SL 22, jul, 2008, rad. 34270, varió su jurisprudencia respecto a los efectos de la mora del empleador en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Es por ello que, a partir de la referida providencia, la Corte estableció que cuando se presente dicha situación, y esto necesariamente impida el acceso a las prestaciones, si además medió incumplimiento de la respectiva administradora en el deber legal que tiene del cobro, es a ésta última a la que le incumbe el pago de las mismas, a los afiliados o a sus beneficiarios.*

*También hizo expresa precisión la Corte, para el caso concreto de los afiliados en condición de trabajadores dependientes, que, si estos han cumplido cabalmente con el deber que les asiste frente a la seguridad social, de prestar el servicio y así causar la cotización, no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del empleador en el pago de los aportes y que, antes de trasladar a éste las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber específico del cobro...”.*

Debe tenerse en cuenta que la obligación de asumir el derecho pensional por parte de la A.F.P., que no inició el trámite correspondiente para obtener el pago de los periodos en mora, mantiene incólume la facultad que la norma le otorgó para hacer efectivo, por la vía ejecutiva, del pago de dichas cotizaciones. Empero se evidencia que, en este caso, la Administradora de Fondo de Pensiones si se hizo parte del proceso liquidatorio de la empresa empleadora, aunque esgrime contar con saldos en rojo, sin ser ello motivo del recurso de apelación, pero su reproche se funda en la recepción de bienes inmuebles cuya naturaleza no líquida imposibilita el flujo que la cuenta de ahorro individual. Dicho argumento, no es aceptado por esta sala de decisión, pues ello conllevaría a establecer que, los bienes recibidos por parte de Porvenir SA como resultado de la liquidación de C.I. SUNISA SA., acrecentarían el patrimonio de la accionada AFP, y no, cumplirían su objetivo, el

cual, no era otro que, saldar la deuda correspondiente a los aportes en deuda, pues la naturaleza de ello no era otra que cubrir los aportes necesarios para la cuenta de ahorro individual del señor Suarez Argumedo durante la existencia de la relación laboral con la extinta empresa.

Tal validez tiene el ingreso de bienes inmuebles al patrimonio de la a AFP, que de manera posterior el legislador reglamentó expresamente tal situación, en el artículo 96 de la Ley 1753 de 2015, el cual, estableció lo siguiente:

***“ARTÍCULO 96. DACIONES EN PAGO.*** *El Gobierno nacional definirá los mecanismos que permitan a las entidades administradoras de cada uno de los subsistemas del Sistema de Seguridad Social defender de manera activa y eficiente los créditos a favor del Estado y de los afiliados en los eventos de concurso de acreedores, optimizando los recursos del Sistema y buscando que se realicen actuaciones conjuntas. Así mismo, el Gobierno definirá los instrumentos que permitan liquidar los activos recibidos a título de dación en pago en el menor tiempo y al mejor valor posible. Sin perjuicio de lo anterior, el valor efectivamente recibido de la liquidación de los activos será el que se impute a favor del afiliado.*

***PARÁGRAFO.*** *Las daciones en pago recibidas por el Instituto de Seguros Sociales que amparaban deudas de sus diferentes negocios, se destinarán en su totalidad a la financiación de las obligaciones pensionales. La imputación de las semanas a los afiliados la realizará Colpensiones por el monto de la deuda pensional definido en el concurso de acreedores, esto es el valor al que se recibió cada uno de los activos.”*

.....

El Decreto 352 del año 2017, mediante el cual, se adiciona un capítulo 4 al título 3 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1833 de 2016 reglamentó la dación en pago así:

***“ARTÍCULO 2.2.3.4.1. Objeto.*** *El presente capítulo tiene como objeto regular el procedimiento para la administración, liquidación y venta de bienes entregados en dación en pago por aportes en mora a las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones, en los eventos de concurso de acreedores y la imputación de pagos correspondiente.*

***ARTÍCULO 2.2.3.4.2. Administración de los bienes asignados en dación en pago a las entidades administradoras de pensiones.*** *Las administradoras de pensiones deberán realizar todas las actividades inherentes a la administración, custodia y enajenación de los bienes recibidos en dación en pago a partir del momento de su recepción. Las administradoras podrán entregar en consignación a un tercero especializado en el tema, los bienes muebles o inmuebles recibidos en dación en pago.*

*En el evento en que un bien haya sido entregado en dación en pago a varias administradoras, el bien se podrá entregar a una sola de ellas, la cual se encargará de liquidar y efectuar las acciones para vender el bien, para lo cual deberá efectuar la primera subasta en un término no superior a los cuatro (4) meses, y repartir su producto entre las otras administradoras en el menor tiempo posible.*

*Las administradoras de pensiones podrán celebrar entre ellas acuerdos de colaboración para realizar de manera conjunta o compartida las actividades de administración, liquidación y subasta de los bienes dados en dación en pago, buscando la transparencia, eficiencia y economía para la optimización de los recursos del Sistema General de Pensiones.”*

Si bien dicha normativa no estaba vigente para el momento en que, se realizó la adjudicación de bienes a favor de la AFP, su ilustración se hace con la simple

intención de aclarar que si era posible la adjudicación de los bienes para impartir los aportes en la cuenta de ahorro individual del señor Suárez Argumedo.

Para esta Sala superioridad ni siquiera se hace necesario acudir a los preceptos legales aludidos, pues pretender suspender la acreditación de pagos recibidos, por cualquier medio, ello hasta la enajenación real de los bienes, desdibujaría la protección del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, que no es otra, que amparar al afiliado, del incumplimiento del empleador frente a las obligaciones inherentes a la relación laboral.

Sin embargo, para la fecha de expedición de la sentencia de primera instancia, ya se había cumplido la recepción de bienes inmuebles como dación de pago de los aportes en mora por los empleadores, por lo cual, la AFP no puede ser renuente en consolidar en la cuenta pensional del señor David Ramón Suárez Argumedo los aportes que hayan sido pagados, pues de lo contrario, sólo incrementarían el patrimonio de la AFP sin cumplir su cometido real.

Dentro de la teoría de las obligaciones, la *adjudicación*, tiene los mismos efectos del pago en suma liquida de dinero, lo que impone a la AFP monetizar el activo, sin que de modo alguno pueda afectar al afiliado, máximo que la administradora accionada ya tiene dentro de su patrimonio los derechos de dominio respectivo.

Es por ello, que es acertada la decisión tomada por la Juez de primera instancia y deberá confirmarse, cayéndose por su peso, el argumento de la apelación interpuesta.

Costas a cargo, de la parte apelante vencida en su recurso en la suma de \$1.160.000

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE**

**PRIMERO:** Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, por las razones antes expuestas.

**SEGUNDO:** Costas a cargo, de la parte apelante vencida en su recurso en la suma de \$1.160.000

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

**Jaime Alberto Aristizabal Gomez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**John Jairo Acosta Perez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Francisco Arango Torres**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **043ec847422974e17a5424b57cf9f11c850f3945833579f34ff6510870e36bef**

Documento generado en 02/03/2023 01:28:59 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**